

Concepción, diez de diciembre de dos mil veinte.

VISTO, OIDOS Y TENIENDO PRESENTE:

I.- ANTECEDENTES GENERALES

1.- DEMANDA:

En este proceso, **RIT O-777-2019** del Ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Procedimiento de Aplicación General por juicio declarativo, compareció, don **RENATO CAMPOS CASTRO**, abogado, domiciliado en Concepción, Canto del Valle N° 1922 Condominio Altos de San Sebastián, Torre Laja, Depto. 204. Lomas San Sebastián, quien deduce demanda en contra de la **CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL REGION DEL BIOBIO**, persona jurídica, representada por su Director General (S) don **Gonzalo Contreras Reyes**, abogado, ambos domiciliado en Concepción, calle Freire N°1.220; fundado en los siguientes antecedentes:

1.1.- Circunstancias de hecho:

Expresa que ingresó a la Corporación de Asistencia Judicial a contar del 10 de enero de 2011, en calidad de abogado auxiliar del Consultorio Jurídico Asiento Tribunal de Talcahuano, en jornada de trabajo de 40 horas semanales en virtud de contrato de plazo fijo.

Luego, con fecha 30 de junio de 2011 se modifica el contrato hasta el 31 de diciembre de 2012, por petición del Director Jurídico de la Época, con su consentimiento, manteniéndose la vigencia del contrato original en la parte no modificada.

Con fecha 02 de enero de 2013 y sin solución de continuidad, se otorga por las partes un contrato por obra o faena, el cual finalizaría por el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo.

Agrega que en el tiempo intermedio de dicho contrato, postuló vía concurso público a un puesto vacante del mismo consultorio, obteniendo dicho cargo, contrato éste con carácter indefinido. Luego y casi cuatro años después, se produce una nueva modificación, con fecha 07 de septiembre de 2017 en la cual, el actor fue contratado por la demandada para ejercer el cargo de abogado en el Programa Piloto de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes, Región Del Biobío, hasta el 31 de diciembre de 2017. La jornada de trabajo era de 45 horas semanales distribuida de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.30 horas. El sueldo base mensual era de \$2.111.382 pesos.

El nombramiento en dicho cargo fue objeto de un concurso público en



carácter de contratación indefinida y la prestación de los servicios profesionales se realizaba en la ciudad de Concepción.

Agrega que con fecha 29 de diciembre de 2017, le enviaron una nueva modificación, que indicaba que la contratación era a plazo fijo, y se extendía desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Como ya se advierte, la empleadora ha recurrido de diversas fórmulas contractuales precarias absolutamente fuera de las reconocidas por la legislación laboral.

Agrega que la función a desempeñar consistía, en términos generales, en prestar asesoría y defensa y representación jurídica de los intereses de niñas, niños y adolescentes ante los Tribunales Ordinarios de Justicia en primera y segunda instancia. Actualmente el programa se denomina hoy “Mi Abogado”.

Indica que con fecha 29 de enero de 2017 se comunicó la ampliación de plazo de su contratación desde el 1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 en el cargo, con una jornada de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas.

Agrega que son fecha 24 de diciembre de 2018 se le comunica, el termino de “reemplazo temporal” al cargo de abogado del Programa a contar del 31 de diciembre de 2018, por lo cual a contar del 1 de enero de 2019 debía reintegrarme a sus funciones anteriores en la oficina de Familia de Talcahuano en el cargo de Abogado de la Oficina, con la jornada y sueldo base que correspondía a dicha función. Dicho cambio representaría un menoscabo evidente en cuanto a que importa una disminución considerable de la remuneración y una modificación a las funciones y al lugar de prestación de servicios, lo cual le está vedado al empleador salvo que concurra la voluntad del trabajador, lo que en este caso no habría ocurrido.

Expresa que el programa en referencia, así como el cargo de abogado requerido en este, continúa existiendo; actualmente incluso se habrían contratado nuevos profesionales para el desarrollo de dichas funciones, con lo cual la modificación unilateral deviene además de ilegal en arbitraria y caprichosa.

Así, sería inentendible que la empleadora en abierta transgresión a los derechos de sus trabajadores recurra a contratar a personal externo y proceda a modificar ilegalmente esos derechos, enviando a trabajadores de planta a sus antiguos cargos. Esta circunstancia configuraría, a su entender, una abierta transgresión de las obligaciones contractuales de la demandada, en cuanto, a pesar de que la actividad que desarrollada sigue ejecutándose, el empleador



procede a modificar no solo las funciones a que tenía derecho ejecutar, sino que agrega otras obligaciones, como no mantener el lugar o ciudad donde se desempeñaba el actor, reducen sus ingresos de manera drástica, todo lo cual se mantendría hasta la fecha de la presente demanda.

Señala que la comunicación por la cual se efectúa una modificación unilateral del contrato de trabajo, no cumpliría con los requisitos necesarios para su eficacia. Es más, al momento de dicha comunicación se encontraba haciendo uso de licencia médica por enfermedad, por lo cual no pudo materializarse el cambio contractual unilateralmente impuesto por su empleador.

Dicha medida y las que vinieron a continuación fueron debidamente reclamadas e impugnadas por el mediante diversos correo electrónicos remitidos a la demandada, especialmente n lo referente a la sustancial rebaja de sus remuneraciones.

Indica que la conducta de la demandada habría vulnerado sus derechos, toda vez que se habría modificado unilateralmente el contrato de trabajo que los vinculaba, en cuanto a sus funciones, remuneración y lugar de prestación de servicios, con menoscabo para él todo lo cual está expresamente vedado al contratante empleador e importaría un incumplimiento contractual grave en cuanto se alteran sustancialmente el cargo y las funciones para las cuales fue contratado, la remuneración pactada y el lugar de prestación de los servicios, infringiéndose gravemente cláusulas esenciales del contrato existente entre las partes, transformando sus cláusulas en inútiles, lo cual no puede ser admitido y por ello se solicita su cumplimiento forzado por la vía judicial, en el sentido de que se deje sin efecto la modificación unilateral, se restituya a las funciones anteriores al 01/01/2019, y se le paguen las remuneraciones que percibía en esa época, como las diferencias de remuneraciones que se produzcan hasta su reintegro definitivo.

Hace presente que la conducta unilateral y arbitraria del empleador fue reclamada ante la Inspección del Trabajo, la cual desechó su reclamación argumentando que carecía de competencia.

Finalmente señala que durante le vigencia de la relación contractual con la demandada siempre se habría desempeñado en óptimas condiciones y durante todo este tiempo no habría recibido ningún reproche a su gestión ni amonestación por parte de su empleadora.

1.2.- Consideraciones de derecho:



Al respecto, cita el artículo 1546 del Código Civil, respecto a la ejecución de los contratos de buena fe, lo que habría trasgredido la demandada al modificar unilateralmente su contrato de trabajo.

Asimismo, se habrían transgredido los artículos 7° y 11 del Código del Trabajo por cuanto se habría alterado unilateralmente un contrato de trabajo más allá de las posibilidades que admite el *ius variandi* regulado en el artículo 12 del mismo cuerpo legal.

Al respecto señala, que el Orden Público Laboral prohíbe los pactos o modificación que afecten el contenido normativo dispuesto por el Código Laboral. En la especie habría una abierta transgresión a los preceptos 2, 5, 7, 11 y 12 del Código del Trabajo.

Señala que dada la duración de la relación contractual, sin solución de continuidad, las pretendidas contrataciones precarias, sean bajo la fórmula de contratación a plazo o contrato por obra, serían inocuas, ya que la contratación indefinida no podría mutar a una contratación precaria.

Por otra parte, señala que en el caso sub lite se aplicaría el principio de la primacía de la realidad, ya que la demandada pretende desconocer que existe una contratación indefinida en los hechos sin que para su modificación se haya requerido la voluntad del actor.

1.3.- Peticiones concretas:

Dado los antecedentes de hecho y de derecho que latamente expone en su libelo pretensor y que se han resumido precedentemente, pide acoger la demanda en todas sus partes, declarando la existencia de un incumplimiento contractual al modificar unilateralmente el contrato, reduciendo su jornada de trabajo y retrotrayendo a la situación anterior, y ordenando el pago de las prestaciones que especifica en la parte petitoria.

2.- CONTESTACIÓN

2.1.- En cuanto a los hechos

-Hechos reconocidos

La demandada reconoce expresamente los siguientes hechos expuestos en la demanda:

1) El funcionario demandante fue contratado por la Corporación el día 02 de enero de 2013, para prestar servicios como abogado auxiliar del Consultorio Jurídico de Talcahuano. Su contrato de trabajo efectivamente está convenido a plazo indefinido.

2) Salvo precisiones en algunas fechas citadas, las modificaciones que



experimentó el contrato de trabajo son las señaladas por el demandante.

3) La remuneración asociada a los cargos que ha desempeñado es la que el actor indica en su demanda.

4) El actor se encuentra en la actualidad prestando servicios como abogado en el Consultorio Jurídico de Talcahuano, con una jornada de 25 horas semanales.

-Hechos que se niegan

1) El demandante no adquirió el cargo de Abogado del Programa Mi Abogado, ni ingresó a aquel en virtud de un concurso público como lo sostiene. El actor participó en un proceso abreviado de selección de antecedentes, para prestar servicios en el programa en forma transitoria.

2) El funcionario convino libremente suscribir una modificación de su contrato de trabajo, para que ésta surtiera sus efectos por un plazo determinado, a contar del 07 de septiembre de 2017. Luego de cumplido el plazo, se convino renovar la modificación. Todas ellas concluyeron, tal como se acordó, el día 31 de diciembre de 2018.

3) Se niega la existencia de diferencias remuneracionales asignadas a uno y otro cargo servido por el demandante. Tampoco hay variación sustancial en lo relativo a las funciones, ni el funcionario debió trasladarse de ciudad.

4) No se ha efectuado modificación unilateral del contrato.

5) No existe deuda de remuneraciones ni de otro tipo en relación al funcionario don Renato Campos Castro.

6) Desconocen la existencia de daño o perjuicio producido al funcionario demandante que se haya generado con ocasión de la relación laboral habida con la Corporación.

2.3.- Génesis de la modificación contractual del actor para su incorporación en Programa

Indica que el actor participó en un Proceso de Selección Abreviado para integrar el equipo de trabajo que tendría a cargo desarrollar el estudio práctico piloto de representación jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Sistema de Protección, modalidad Residencial del Servicio Nacional de Menores, según un Convenio que se suscribió con el Ministerio de Justicia y las 4 Corporaciones de Asistencia Judicial.

Agrega que en el Convenio aludido, en su cláusula segunda, se señalan los fundamentos del Programa Piloto y que dice relación con la necesidad de dar representación jurídica a los niños y niñas que se encuentra ingresados en



sistema residencial del Sename, el que permitiría también levantar, al mismo tiempo, información que permitiera evaluar las prácticas de representación jurídica propuestas por el Ministerio. En este contexto el Ministerio se habría obligado a proporcionar los recursos que permitiesen a la Corporación la ejecución del programa, que tenía como fecha de término el 31 de diciembre de 2017, y que por razones que evaluó en su momento la Dirección General se habría prorrogado por 30 día una vez concluido el plazo anterior, hasta que el Ministerio por ley presupuestaría habría prorrogado el financiamiento por 6 meses más.

Para proveer al personal idóneo, la Corporación a mediados del mes de agosto de 2017 se habría dado a la tarea de buscar profesionales que cumpliesen con el perfil requerido, a través de varios Procesos de Selección Abreviados, según las bases dadas en cada uno de estos procesos, las que en general decían relación con la finitud del programa, por los que los profesionales fueron incorporados bajo la modalidad a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2017.

Agrega que el actor fue seleccionado en uno de esos procesos para desempeñarse en el Programa, acordando modificar transitoriamente su contrato de trabajo, en lo relativo a las funciones, dependencia, lugar de prestación de los servicios y otras cláusulas accesorias. En virtud de esa modificación el demandante se trasladó a prestar servicios desde Talcahuano a la comuna de Concepción, respecto de las cuales fue debidamente informado dando su consentimiento al suscribir voluntariamente las modificaciones de contrato aludidas.

2.4.- Exclusión del Programa Mi Abogado

Agrega que el programa piloto al que alude se habría transformado con posterioridad en una línea de trabajo del Ministerio y por tal razón se habrían comprometido los recursos financieros para la continuidad del mismo, por esta razón, la Dirección de la Corporación se decide llamar a concurso público para la provisión de los cargos titulares, proceso en el cual no habría participado el actor.

Al respecto, hace presente que los procesos de obtención y selección de personal de la Corporación, se encuentran reglados en un Manual de Obtención y Selección de Personal, que establece como regla general para el ingreso a la institución el mecanismo del concurso y que los postulantes seleccionados para su contratación deben pasar por la aprobación del Consejo Directivo de la



Corporación.

No obstante lo anterior, y dado que el Programa Piloto tenía una duración definida y estaba sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ministerio, es que las autoridades de la época habrían optado por realizar un “procedimiento abreviado”, que carecería del nivel de profundidad para analizar las competencias y conocimientos de los profesionales que participan, precisamente, por la temporalidad que conllevaba el Programa.

Dado entonces que el actor no participó del Concurso Público al que llamaron las nuevas autoridades de la Corporación, éste quedó excluido del Programa y por ende debió volver a sus funciones anteriores según su contrato de trabajo.

Agrega que dicho Concurso Público resultaba necesario para proveer los cargos definitivos en el denominado Programa Mi Abogado efectuado, y se habría verificado el 16 de noviembre de 2018, mediante Resolución Exenta N° 110, de 2018, del Director General(s), publicándose tanto en la página web de esta Institución como en los medios de comunicación respectivos.

Indica que aquellos profesionales y empleados que no participaron de este concurso, debieron retornar a sus funciones originales, si eran trabajadores ya de la Corporación o cesaron en ellas si eran externos.

2.5.- Del Pago de Remuneraciones

Expresa que las remuneraciones en sí no habrían experimentado variación con ocasión de la modificación contractual, lo que se concluye al comparar la jornada de trabajo que correspondía cumplir al funcionario en Talcahuano y luego en Concepción, pues aumentó de 25 horas a 45 horas semanales, lo que naturalmente arroja un monto mayor, pero proporcionalmente al tiempo servido, el valor por hora es el mismo.

Con ocasión de la modificación contractual que permaneció vigente entre el 7 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, las partes pactaron se percibiría por parte del funcionario un sueldo base mensual del valor proporcional al tiempo de dedicación, de 45 horas a la semana.

Desde septiembre del año 2017 las remuneraciones se compusieron así, por un sueldo base de \$2.111.382.-, sobre el que se calcularon las asignaciones variables detalladas en su contrato, todo ello en proporción a los días trabajados en el Programa.

Actualmente el actor percibiría la remuneración proporcional a su jornada parcial de trabajo.

Por otro lado, y dado que el actor mantuvo suspendida su relación laboral



por licencias médicas continuas, el importe de sus remuneraciones no resultaron mermadas, toda vez que siguió percibiendo una remuneración equivalente a la que tenía en el Programa dado la base de cálculo que se considera para determinar el subsidio por incapacidad laboral.

De allí que no existiría perjuicio patrimonial alguno para el actor en los términos alegados en su demanda, por cuanto a su reincorporación comenzó a percibir la remuneración correspondiente al cargo del cual era titular antes de incorporarse al programa piloto “Mi Abogado”, que correspondería a una jornada parcial de 25 horas semanales, sin que la Corporación pueda seguir pagándole la remuneración que tuvo transitoriamente cuando aumentó su jornada de trabajo, dado que esta debe regirse por el principio de legalidad y siendo además las remuneraciones la contraprestación debida acorde a la jornada parcial que actualmente desempeña.

Agrega que tampoco habría sido suspendida asignación de bono alguna producto de la modificación contractual, sin perjuicio de que en el petitorio no señala periodos en que ello habría sucedido, ni la base sobre la que se calcula, todo ello porque han sido debidamente pagadas, conforme al cumplimiento de las Metas Anuales de Incentivo, conocidas también como PMG del año 2018, como se acreditará. En consecuencia, nada se adeuda por tal concepto, ni por otro.

2.6.– Fundamentos de derecho

Al respecto, en primer término hace alusión a la normativa legal que Regula a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, que es una institución especializada de derecho público sin fines de lucro, creada por la ley N° 17.995, de 8 de mayo de 1981, con presencia en cinco regiones del país.

Luego alude al Decreto N° 994, de 21 de septiembre de 1981 de la Subsecretaría de Justicia, que aprobó los estatutos por los cuales se rige la Corporación. En dichos estatutos se establece la forma de organización de la Corporación y las funciones y facultades conferidas a cada estamento, señalándose que será dirigida por un Consejo Directivo, órgano colegiado presidido por el Secretario Regional Ministerial de Justicia de la Región del Biobío e integrado además, por los abogados que el decreto establece.

Asimismo expresa que artículo único de la ley N° 19.263, dispone que el Estatuto Administrativo no se aplica al personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial, el que se rige exclusivamente por los respectivos contratos



de trabajo y las normas aplicables al sector privado.

Alude a que por ser un servicio público, sus trabajadores tendrían la calidad de funcionarios públicos, ya que se desempeñan en organismos que forman parte de la Administración, sin perjuicio del régimen jurídico que regula el vínculo laboral de dicho personal. Luego, a las Corporaciones de Asistencia Judicial les resultan plenamente aplicables las normas contenidas en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Expresa que la Contraloría General de la República se ha pronunciado en ese sentido, y cita entre otros, Dictamen N°49.757 de 2002, que señalan que no serían aplicables las normas del Estatuto Administrativo a los trabajadores de la Corporación, y estos se regirían por sus propios contratos y las normas del derecho privado, no obstante ostentar la calidad de funcionarios públicos al desempeñarse en un Servicio Público.

Agrega que, en tal sentido, como lo ha resuelto también la Contraloría, las modificaciones consentidas por el actor no tratan sobre derechos que tengan la calidad de irrenunciables para el funcionario, sino que se trata de ciertas alteraciones en cuanto a las funciones específicas en relación a la materia de especialización a la que se ha dedicado, a su jornada y distribución, dependencia, etc., todas las cuales se ofrecieron de forma temporal. Y no pudo ser de otro modo, pues los fondos inyectados al presupuesto de la Corporación con ocasión de la celebración del Convenio con la Subsecretaría de Justicia no son permanentes y a la fecha de instalación del Programa “Mi abogado” se proyectaba a corto plazo.

Así, las modificaciones temporales que en el caso se pactaron y consignaron por escrito no se encontrarían específicamente reguladas en el Código del Trabajo y por ende cobraría aplicación al respecto el derecho común, citando, entre otros, los artículos 1545 y 1546, relativos a la ley del contrato y la buena fe contractual.

Dado lo anterior es que solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes con costas, siendo improcedente el pago de las prestaciones que demanda en su libelo.

3.- LOS HECHOS DE LA CAUSA

Llamadas las partes a conciliación en la audiencia preparatoria, esta no se produjo, razón por la cual se recibió la causa a prueba, fijándose como controvertidos los siguientes hechos:



- 1.- Cláusulas de los contratos de trabajo que han vinculado a las partes.
- 2.- Génesis del contrato suscrito entre las partes de fecha 7 de septiembre de 2017. En su caso, vigencia, lugar donde se desempeñaban las funciones por parte del trabajador, remuneración asignada al cargo y periodo trabajado.
- 3.- Efectividad de haberse modificado el contrato de 7 de septiembre de 2017 por voluntad unilateral, en su caso facultades para ello.
- 4.- Efectividad de que las funciones que comprendían el programa “Mi abogado” se encuentran siendo desempeñadas o ejecutadas por otros profesionales, época u oportunidad en que ello se produjo.
- 5.- Menoscabo que esta circunstancia causó en el trabajador.
- 6.- Prestaciones adeudadas y compensaciones por subsidios como consecuencia de licencias médicas otorgadas al actor

4.- PRUEBA

Se incorporaron en la audiencia de juicio por las partes los siguientes medios de prueba:

4.1.- Prueba de la parte demandante

-Documental

- 1.- Contrato de Trabajo de 10 enero de 2011 entre don Renato Campos y la Corporación de Asistencia Judicial Región del Bio Bio.
- 2.- Contrato por Obra de 02 de enero de 2013 entre don Renato Campos y la Corporación de Asistencia Judicial Región del Bio Bio.
- 3.- Modificación de Contrato de Trabajo de fecha 30 de junio de 2011.
- 4.- Modificación de Contrato de Trabajo de fecha 02 de septiembre de 2013.
- 5.- Modificación de Contrato de Trabajo de fecha 07 de septiembre de 2017; Inicio Programa NNA, luego Mi Abogado.
- 6.- Modificación de Contrato de Trabajo de fecha 29 de diciembre de 2017; continuación programa.
- 7.- Modificación de Contrato de Trabajo de fecha 01 de febrero de 2018; continuación programa.
- 8.- Liquidaciones de sueldo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018; programa, remuneraciones y bonos.
- 9.- Dos liquidaciones de sueldo de los meses de enero y febrero de 2019; remuneración Caj Talcahuano.
- 10.- Convenio de 07 de agosto de 2017 para la ejecución de un estudio



práctico, piloto representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en sistema de protección, modalidad residencial del Sename; primer convenio Caj Ministerio Justicia.

11.- Decreto N° 54 de 17 de enero de 2019 del Ministerio de Justicia que aprueba Convenio de colaboración y transferencia para la ejecución del programa de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes denominado "Mi Abogado"; Convenio 2019.

12.- Decreto 130 de 13 de febrero de 2019 del Ministerio de Justicia que aprueba Convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Justicia y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio Bio para la prestación del servicio denominado: "Programa de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en Sistema de Protección, modalidad Residencial del Sename"; Convenio 2018.

13.- Acta de llamado a concurso para postular al cargo de abogado e integrar equipo de trabajo a cargo de desarrollar el estudio práctico, piloto de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Sistema de Protección, modalidad Residencial del Sename.

14.- Correo electrónico de 06 de septiembre de 2017 en donde se le informa a don Renato Campos el inicio de funciones para el cargo de Abogado en el Programa Piloto de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes (NNA).

15.- Correo electrónico de 05 de enero de 2018 en donde se informa que se encuentra disponible la modificación de contrato de trabajo hasta el 31 de enero 2018.

16.- Correo electrónico de 31 de enero de 2018 en donde se informa la ampliación del plazo de su modificación temporal desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 en el cargo de abogado del Proyecto NNA.

17.- Correo electrónico de 24 de diciembre de 2018 en donde se informa término de reemplazo en cargo de abogado del Programa Mi Abogado EX NNA Sename Concepción.

18.- Correo electrónico de fecha 29 de enero de 2019 en donde se da respuesta a consulta sobre remuneración del mes de enero de 2019.

19.- Certificado emitido por la Corporación de Asistencia Judicial Región del Bio Bio, de 20 de noviembre de 2018, en donde consta la fecha de ingreso de don Renato Campos a dicha entidad, el carácter indefinido de su contrato y otras referencias.



- 20.- Copia de noticia publicada en el Diario el Sur de fecha 16 de octubre de 2018 titulada "Programa judicial atiende a cerca de 500 niños que viven en hogares del Sename". Publicidad programa 16 de octubre de 2018, pág. 7.
- 21.- Copia de Resolución N°330 de la Dirección del Trabajo de fecha 25 de junio de 2018 que acoge reclamación formulada por doña Ana del Carmen Méndez Ortega en contra de la Corporación Nacional Forestal.
- 22.- Copia de noticia publicada en la página web del Ministerio de Justicia, referente a que Subsecretario de Justicia Nicolás Mena Letelier, lanza Programa Nacional de Protección Jurídica para la Infancia en el Región del Bio-bío, de 9 de noviembre de 2017; informa que programa parte como piloto, pero en 2018 sigue como política pública permanente; en <http://www.minjusticia.gob.cl/subsecretario-de-justicia-lanzaprograma-nacional-de-proteccion-juridica-para-la-infancia-en-laregion-del-biobio>.
- 23.- Copia de noticia publicada en la página web de la Radio Espacios fm, referente a que Subsecretario de Justicia Nicolás Mena Letelier y doña María Estela Ortiz Rojas Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Inauguran Programa NNA en el Región del Bio-Bío, de 10 de noviembre de 2017; informa que programa parte como piloto, pero en 2018 sigue como política pública permanente; <http://espaciosfm.cl/enconcepcion-presentan-programa-nacional-de-proteccion-juridica-para-la-infancia/>
- 24.- Copia de noticia publicada en la página web del Sename, referente a que Ministerio de Justicia anuncia ampliar el Programa "Mi Abogado" al resto del país, de 27 de agosto de 2018; <http://www.sename.cl/web/2018/08/27/mi-abogado-ministeriode-iusticia-anuncio-plan-que-entregara-una-defensa-juridica-especializada-a-lainfancia-y-adolescencia-vulnerada/>
- 25.- Copia noticia publicada en el diario "La Tercera", que da cuenta que plan que otorga defensa legal a niños vulnerados tendrá cobertura nacional el 2020, de 23 de agosto de 2018, en <https://www.latercera.com/nacional/noticia/plan-otorga-defensa-legalninos-vulnerados-tendra-cobertura-nacional-2020/292955/>
- 26.- Copia noticia publicada en web de la Caj Metro, referente a que ministro Larraín lanza Programa "Mi Abogado" en Seminario "Representación Jurídica: Hacia una Defensa Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes", 24 de agosto 2018. <http://www.caimetro.cl/noticias/ministro-larrain-lanza-programa-mi-abogado-enseminario-representación-jurídica-hacia-una-defensa-es/>
- 27.- Licencias médicas Isapre Cruz Blanca de fechas 5/11/2018; 16/11/2018; 21/11/2018; 5/12/2018 y 2/1/2019, respectivamente.



28.- Certificado de Término de Reposo Laboral, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, de fecha 21 de marzo de 2019.

29.- Oficio N° 2/2019, Ref. No pago de remuneraciones "Programa Mi Abogado", de 23 de enero de 2019, enviado por doña Claudia Fachinetti Farran, dirigido al Subsecretario de Justicia Juan José Ossa Santa Cruz, por el que se acusa un "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato".

-Confesional:

Absolvió posiciones el representante legal de la demandada, don **Mauricio Alejandro Vergara Cangas**, Rut 11.677.314-7.

Su declaración íntegra consta en el respectivo registro de audio de la audiencia de juicio del día 4 de febrero de 2020.

-Testimonial:

Declararon en juicio las siguientes del día 4 de febrero de 2020, los siguientes testigos:

1.- Doña **Claudia Hilda Sepúlveda Constanzo**, Rut 10.037.626-1, Abogada, domiciliada en Ainavillo 633, Concepción.

2.- Doña **Mariela Adelina Fuentealba Retamal**, Rut 10.823.933-9, Asistente Social, domiciliada en Ainavillo 633, Concepción.

-Exhibición de documentos:

Solicitó la exhibición de la nómina de postulantes seleccionados en virtud del Procedimiento Abreviado 2017 que dio inicio al programa de representación jurídica, ex NNA actual "Mi abogado" incluyéndose todas las contrataciones de profesionales como las modificaciones contractuales efectuadas para dicho programa, ya sean profesionales que prestaron servicios para la CAJ o que fueron contratados para dicho Programa.

La parte demandada no cumple con la exhibición de los documentos, pidiendo el abogado del actor la aplicación del apercibimiento del artículo 453 N°5 del Código del Trabajo.

Dado la naturaleza de la acción deducida y teniendo en consideración la forma en que se resolverá la controversia, no se dará lugar al citado apercibimiento por ser irrelevante.

4.2.- Prueba de la parte demandada:

-Documental:



- 1.- Modificación de Contrato de Trabajo de 02 de septiembre de 2013.
- 2.- Modificación de contrato de trabajo de 07 de septiembre de 2017.
- 3.- Modificación de contrato de trabajo de 29 de diciembre de 2017.
- 4.- Modificación de contrato de trabajo de 01 de febrero de 2018.
- 5.- Liquidaciones de remuneraciones del periodo comprendido de los meses de enero a junio de 2019.
- 6 - Registro de Asistencia del año 2019.
- 7.- Manual de Obtención de Personal.
- 8.- Convenio suscrito con la Subsecretaría de Justicia en el mes de agosto de 2017.
- 9.- Bases de procedimiento de Selección abreviada de antecedentes para los cargos del programa del año 2017.
- 10.- Antecedentes de la postulación presentados por el actor.
- 11.- Resolución N°110 aprobatoria de las Bases del Concurso Público para proveer cargos del programa Mi Abogado de noviembre de 2018.
- 12.- Reglamento Interno Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación.
- 13.- Tabla de cálculo de rentas brutas percibidas mensualmente.

-Confesional:

Absolvió posiciones en la audiencia de juicio del día 20 de noviembre de 2020 don **Renato Campos Castro**, Rut 13.507.128-5.

Su declaración íntegra consta en el respectivo registro de audio de la audiencia de juicio.

-Testimonial:

Declaró doña **Paola Andrea Bustamante Maturana**, Rut 13.623.187-1.

Su declaración íntegra consta en el registro de audio de la audiencia de juicio del día 20 de noviembre de 2020.

Otra prueba: oficios:

1.- Solicitó oficiar a la **Asociación Chilena de Seguridad**, la que con fecha 28 de octubre de 2019 informa sobre la calificación de las enfermedades del actor.

2.- A la **Isapre cruz Blanca**, la que con fecha 29 de julio de 2019 informa sobre las licencias médicas otorgadas al actor.

III.- SOBRE EL INCUMLIMIENTO CONTRACTUAL ALEGADO

El actor alega incumplimiento contractual en estos autos el que sustenta



en el hecho que la demandada pasando a llevar la normativa legal que rige la relación laboral que las une, el día 24 de diciembre de 2018 le habría modificado unilateralmente su contrato de trabajo, modificándole sus funciones, lugar de prestación de los servicios, remuneraciones y jornada de trabajo.

Pide en definitiva dejar sin efecto la citada comunicación y restituirle a la situación contractual anterior al 1 de enero de 2019.

La parte demandada defiende pidiendo el rechazo de pretensión del actor, negando incumplimiento contractual, y aduciendo que la comunicación a que hace referencia la demanda no constituiría una modificación unilateral del contrato de trabajo del actor, toda vez que el actor se encontraba transitoriamente desempeñando funciones en un programa piloto para brindar asesoría a los niños y niñas ingresados en centros residenciales de la red Sename, conforme a las modificaciones contractuales que suscribieron ambas partes en su oportunidad, teniendo conocimiento el actor la naturaleza de las mismas como dan cuenta los contratos suscritos, toda vez que el citado Programa dependía de presupuestos ajenos a la Corporación en el marco de un Convenio suscrito con el Ministerio de Justicia que era temporal y sujeto a la aprobación periódica de las partidas respectivas. Funciones que se desempeñaron hasta el plazo estipulado el cual una vez expirado hizo que el actor retornara a sus funciones originales en el marco del contrato indefinido por media jornada como abogado auxiliar del Consultorio de Talcahuano.

A mayor abundamiento, indica que el cargo que ejerció temporalmente el actor en el citado Programa se sometió a concurso público acorde los lineamientos del Convenio suscrito con el Ministerio de Justicia y según los requerimientos de este último, concurso en el cual no habría participado el actor.

En el presente capítulo se analizarán los antecedentes aportados por las partes al tenor de la normativa legal que regula la relación laboral del caso sub lite a objeto de determinar si existió o no el incumplimiento alegado por el actor.

1).- Antecedentes de la relación laboral

En el caso sub lite, si bien no se fijaron hechos no controvertidos en la audiencia preparatoria, del tenor de los escritos fundamentales y de la propia declaración de la demandada no hay controversia sobre los siguientes hechos:

1º) Existencia de la relación laboral entre el actor y la Corporación de



Asistencia Judicial del Bío Bío.

2°) Las funciones de abogado que desempeña el actor para la demandada.

3°) La fecha de inicio de esta relación laboral a partir del 10 de enero de 2011, como abogado auxiliar del Consultorio de Talcahuano por una jornada de trabajo de 40 horas, en un contrato de trabajo que era a plazo.

4°) Los sucesivos contratos de trabajo a plazo, por obra o faena y finalmente indefinido que suscribieron las partes el 30 de junio de 2011, el 2 de enero de 2013, el 2 de septiembre de 2013, este último por una jornada de trabajo de 25 horas semanales en el Consultorio de Talcahuano.

5°) La circunstancia de haberse suscrito nuevos contratos de trabajos el 7 de septiembre de 2017, que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2017; el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

6°) El hecho que la última función desempeñada por el actor entre el 7 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 fue como abogado en el Programa ejecutado en el marco de un convenio con el Ministerio de Justicia para brindar asesoría legal a los niños y niñas ingresados en centros residenciales de la red Sename, con una jornada de trabajo de 45 horas semanales, siendo el lugar de prestación de los servicios las dependencias de la Corporación en la ciudad de Concepción, con una remuneración acorde a dicha jornada.

7°) La circunstancia que la Corporación de Asistencia Judicial comunicó el actor el 24 de diciembre de 2018 que cesaba en las funciones anteriores, esto es abogado del Programa aludido y retornaba a desempeñar funciones como abogado del Consultorio de Talcahuano con una jornada de 25 horas semanales.

8°) El Programa de asesoría jurídica al que se ha hecho alusión, a partir del año 2019 pasó a denominarse Mi Abogado, y responde a una política permanente del Ministerio de Justicia que se ejecuta hasta la fecha por la Corporación de Asistencia Judicial.

9°) Finalmente que el actor para ejercer el cargo en el citado programa se sometió al denominado “Procedimiento de Selección Abreviada de Antecedentes para los cargos del programa del año 2017”, como asimismo, que este mismo cargo fue objeto luego de un concurso público de antecedentes, del cual el Actor no participó.

Todo lo anterior también fue corroborado por la prueba documental incorporada por las partes en el juicio consistente en copia de los diversos contratos de trabajo suscritos por las partes, copia de los Convenios suscritos



con el Ministerio de Justicia y antecedentes de los concursos para proveer los cargos del Programa Mi abogado.

2.- Naturaleza de la relación laboral en cuanto al plazo de la misma

En cuanto a la naturaleza de la relación laboral con relación al plazo del contrato, tampoco existe discusión, las partes se encuentran constates respecto de la naturaleza indefinida del contrato de trabajo del señor Campos, así lo reconoció expresamente la demandada en su escrito de contestación y así también se desprende de la modificación de contrato de fecha 2 de enero de 2013, en su cláusula décimo tercera.

En cuanto a las modificaciones contractuales posteriores habrá que estarse a lo que se indicará en el párrafo siguiente.

3.- Régimen jurídico que regula la relación contractual de las partes

Tampoco hay discusión en cuanto a que el régimen jurídico que regula la relación contractual de las partes es el Código del Trabajo, no tan sólo por qué así lo ha reconocido la demandada, sino porque la normativa legal y reglamentaria de la Corporación de Asistencia Judicial así lo señalan expresamente.

En efecto, el artículo único de la Ley 19.263 que fija normas aplicables al personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial dispone *“las disposiciones del Estatuto Administrativo no se aplican al personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial...el que continuará rigiéndose exclusivamente por los respectivos contratos de trabajo y las normas aplicables al sector privado...”*

Sabemos por lo dispuesto en el artículo 1° del Código del Trabajo que el régimen común del sector privado lo da precisamente este cuerpo de leyes, al señalar *“las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y su leyes complementarias”*.

A su turno, de los artículos 10 N°6, 10 bis y 159 N°4 se desprende que las calidades en que puede ser contratado un trabajador, en cuanto a su vencimiento, son las de contrato indefinido, a plazo y por obra o faena, siendo éstos dos últimos de carácter excepcional, dado el principio de continuidad y estabilidad en el empleo que inspira la legislación laboral, y limitados a los tiempos y circunstancias allí establecidas.

En consecuencia, la circunstancia que la Corporación de Asistencia Judicial sea una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y que sus



empleados puedan ser tratados como empleados públicos, según la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, citada por la demandada, en nada altera la calidad contractual de su personal, el que seguirá rigiéndose por la normativa laboral aplicable al sector privado, y en lo que importa al caso sub lite, especialmente en lo que dice relación con las calidades en que pueden ser contratados los trabajadores.

Dado lo anterior, ¿estaba autorizada legalmente la Corporación de Asistencia Judicial para alterar la calidad contractual del actor?, esto es, modificar la naturaleza indefinida de su contrato de trabajo adquirida por la Modificación de fecha 2 de septiembre de 2013, según se desprende de su cláusula décimo tercera, para temporalmente transformarlo en un contrato a plazo, según rezan las cláusulas respectivas de las modificaciones contractuales de fechas 7 de septiembre de 2017, 29 de diciembre de 2017 y 1 de febrero de 2018.

Debemos concluir que no, toda vez que no hay norma alguna que autorice al empleador a transformar un contrato de carácter indefinido en uno de índole precaria como lo es el contrato a plazo, más aún cuando el actor ostentaba un contrato de carácter indefinido desde el mes de septiembre de 2013, pues la única posibilidad es la que contempla el artículo 159 n°4 inciso 3° del Código del Trabajo, pero por cierto, es la situación contraria, es decir, el paso de un contrato a plazo a otro de naturaleza indefinida. Y esto se debe a la naturaleza tutelar del derecho del trabajo y a los principios de continuidad y estabilidad en el empleo, que inspiran la legislación del ramo.

Lo anterior significa que entre las partes no se pudo haber pactado un anexo o modificación de contrato para mutar la calidad de indefinido de un contrato a uno a plazo y menos aún pactar un pacto comisorio calificado, figura jurídica completamente ajena a la legislación laboral, dada la naturaleza tutelar de este derecho, que busca precisamente limitar la autonomía de la voluntad del derecho privado común por la situación de desequilibrio que se produce al interior del contrato de trabajo. Esta cláusula o modificación del contrato debe ser analizada, como ya se señaló, al tenor de las restantes normas laborales de las cuales se desprende que no es posible en modo alguno la mutación de un contrato estable a uno de naturaleza precaria, sin que por cierto haya mediado despido o caducidad del contrato, más aún, cuando de los antecedentes documentales y de la prueba testimonial rendida por las partes, se desprende con meridiana claridad que el actor ha prestado servicios en forma continua e ininterrumpida para la demandada por más de 9 años, esto es, desde enero del



año 2011 a la fecha.

En consecuencia, siendo aquella una cláusula contradictoria, por aplicación del principio protector, deberá preferirse aquella que más favorezca al trabajador y que sea consistente con los principios de continuidad y estabilidad que inspiran la legislación laboral, esto es, que la naturaleza del contrato del actor nunca dejó de ser indefinida, aún en aquél tiempo que desempeñó las funciones de abogado del Programa Piloto de asistencia jurídica a los niños y niñas ingresados en centros residenciales de la red del Servicio Nacional de Menores, el que más tarde pasó a denominarse “Mi Abogado”.

4.- Modificación unilateral del contrato del actor

Teniendo en consideración lo expresado en el párrafo anterior, corresponde analizar la comunicación que hiciera el empleador al actor con fecha 24 de diciembre de 2018 mediante correo electrónico, en la cual se informa lo siguiente: *“...le informamos que el reemplazo temporal que realiza en el cargo de abogado del Programa Mi Abogado, Ex NNA Sename Concepción, llega a su término con fecha 31 de diciembre de 2018, por lo cual a contar del 1 de enero de 2019 se debe reintegrar a sus funciones habituales en la Oficina de Familia de Talcahuano, en el cargo de abogado de la oficina, con la jornada y sueldo base correspondiente a dicho cargo”*.

Sin duda alguna que lo primero que llama la atención es la expresión “reemplazo” utilizada en el texto, por cuanto ello supone la ausencia de un titular que es reemplazado por diversos motivos por otro trabajador, ya sea externo o parte del staff de trabajadores, cuyo no es el caso de autos, toda vez que consta de los antecedentes acompañados por las partes, y a los que ya se ha hecho referencia, especialmente a las copias de los convenios celebrados entre la Corporación y el Ministerio de Justicia, que el cargo de abogado que detentaba el actor en el Programa NNA del Sename era un cargo nuevo en un programa nuevo, a la sazón piloto y más tarde se transformaría en un Programa Permanente. Es decir, en modo alguno se trataba de un reemplazo, más aún consta en los antecedentes documentales acompañados por ambas partes, que el actor participó en un proceso de selección de personal regulado en el documento denominado “Proceso Abreviado de Selección de Personal, para ocupar un cargo nuevo, en un Programa nuevo –haya sido piloto o no– que tenía por objetivo asistir jurídicamente a los niños y niñas ingresados en medida de protección a centros residenciales de la red del Servicio Nacional de Menores.



Pero lo más importante, es que esta comunicación, a juicio de este sentenciador, constituye sin duda una modificación unilateral del contrato de trabajo que unía a las partes más allá de lo permitido en el artículo 12 del Código del Trabajo, que autoriza excepcionalmente modificaciones unilaterales por parte del empleador, siempre y cuando éstas no impliquen menoscabo al trabajador, pues la demandada redujo la jornada de trabajo del actor de 45 a 25 horas semanales, alteró las funciones y disminuyó la remuneración; ninguna de estas modificaciones se encuentra permitida por el legislador laboral, sin que concurra el consentimiento del trabajador. Y al ocurrir esto, estamos frente al incumplimiento alegado por el actor.

En efecto, tal como lo expresa la parte demandante el contenido de un contrato de trabajo configurado en los términos establecidos en el artículo 7° del Código del ramo, esto es, la convención por la cual empleador y trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada, no puede ser alterado unilateralmente por el empleador, sin que ello implique una transgresión a normas fundamentales del referido Código, como las de los artículos 2°, 5° y 11, que constituyen la columna vertebral de la naturaleza tutelar del derecho del trabajo, al establecer que la libertad contractual tiene como límites el respeto a la dignidad de la persona, siendo contrarios a ellas lo acoso laboral y de discriminación, y el respeto a los derechos fundamentales, estableciendo la irrenunciabilidad de los derechos laborales en tanto se encuentre vigente la relación laboral y exigiendo como formalidades inexcusables que las modificaciones contractuales deben constar por escrito y deben ser suscritas por las partes.

Por otro lado, se han violado en la actuación de la demandada disposiciones del derecho común, tales como las contenidas en los artículos 1545 y 1546 del Código Civil; el primero dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo; mientras que el segundo dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe.

Nada de aquello ocurrió con la comunicación del 24 de diciembre de 2018. De allí que es menester acoger la demanda del actor en la forma que se expresará en la parte dispositiva.

5.- Otras alegaciones de la demandada

La Corporación ha señalado como una de sus alegaciones de defensa que



el cargo que ejercía el actor en el programa NNA de la Red Sename era transitorio (lo que por cierto ya se desvirtuó según lo señalado precedentemente) por cuanto se trataba de un plan piloto y que cuando éste se transformó en permanente era necesario reclutar el personal conforme a las políticas generales de reclutamiento de la Corporación y según las exigencias del propio Ministerio, haciendo hincapié en la necesidad de llamar a un concurso público.

Lo cierto es que dicho argumento no tiene sustento jurídico alguno, según lo ya indicado en el párrafo precedente, no obstante cabe señalar que aun así, no es atendible escuchar tal alegación.

En efecto, el actor acreditó que para ocupar el cargo se sometió a un Concurso Público Abreviado, en el que participaron ponentes internos y externos, acreditando tener los conocimientos necesarios para desempeñar las mismas funciones de asesoría jurídica que venía cumpliendo desde el año 2011 para la demandada. Según da cuenta la prueba documental consistente en las bases de dicho concurso, los antecedentes presentados para participar en el proceso de selección y los correos electrónicos que dan cuenta de la designación en tales funciones por parte de la Dirección de la Corporación de Asistencia Judicial, lo que fue reforzado por la declaración de los testigos **Claudia Hilda Sepúlveda Constanzo** y **Mariela Adelina Fuentealba Retamal**, quienes corroboraron tal circunstancia. Lo anterior es consistente con la declaración del actor en la diligencia de absolución de posiciones.

Por otro lado, el llamado a concurso público de antecedentes de las nuevas autoridades de la Corporación no tiene justificación alguna cuando el Programa ya estaba conformado por un equipo de trabajo que venía desarrollando dichas funciones por más de un año; por lo demás si se contrastan las bases de cada concurso, los perfiles exigidos son prácticamente los mismos, pues de lo que se trata era de reclutar profesionales, en el caso del actor, que ejercieran labores de asesoría jurídica en el ámbito de la infancia en situación de vulnerabilidad, específicamente respecto de niños que se encuentran ingresados en centros residenciales del Sename con medidas de protección, cuestión que el actor desempeñó por largos años, pues precisamente estaba adscrito al consultorio de Talcahuano en materias de familia, según dan cuenta sus respectivos y sucesivos contratos de trabajo y modificación de los mismos, su curriculum vitae y los antecedentes relativos a la tramitación de causas en el Juzgado de Familia de Talcahuano y el Certificado suscrito por la Secretaria Subrogante de la Corte de Apelaciones de Concepción



que da cuenta de la comparecencia del actor patrocinando causas de Familia, antecedentes éstos últimos que incorporó en el juicio la propia demandada.

Tampoco se corroboró con medio de prueba alguno que la exigencia del Concurso Público al que alude la demandada sea la condición única y necesaria para ingresar a prestar servicios a la citada entidad, pues ambos procedimientos, el Abreviado y el Concurso Público están amparados por la propia entidad que los convocó, no existiendo norma alguna en el Reglamento Interno que dé cuenta de la exigencia de uno u otro procedimiento como la vía por la cual se debe reclutar el personal. Teniendo presente además, que el Manual para la Obtención de Personal habla única y exclusivamente de concurso público, sin especificar si se trata de Abreviado o Público propiamente tal, y en todo caso ambos son públicos como se desprende de las Bases de Llamado de ambos tipos de concurso que se incorporaron por la propia demandada.

Por último cabe tener presente que el Programa de defensa jurídica de la infancia en condición de residencialidad desde temprano se manifestó como una necesidad de política pública permanente, como dan cuenta los antecedentes aportados por la parte demandante consistente en reportes de noticias diversas en medio digitales y escritos, y ya en el Gobierno de la Presidenta Bachelet se decía que era una política general del estado, y prueba de ello es que en tiempo no superior a un año, el financiamiento de dicho programa pasó a conformar parte de la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia, de tal forma que entre el Plan Piloto de NNA de la Red Sename y el Programa Mi Abogado conforma un continuum, y en modo alguno justificaba armar equipos transitorios de trabajo, tal como se desprende de las alegaciones de la demandada.

No cabe más entonces que desestimar dichas alegaciones de la parte demandada.

IV.- PETICIONES DE LA PARTE DEMANDANTE

1.- Restitución al cargo que desempeñaba el actor

Acorde lo razonado precedentemente, corresponde acoger la petición del actor en los términos que se indicará en la parte resolutive.

2.- Pago de diferencias remuneracionales que se hayan producido

Corresponde acoger también esta pretensión toda vez que el actor a la fecha de la modificación unilateral de su contrato de trabajo cumplía una jornada de 45 horas semanales y actualmente está percibiendo una



remuneración equivalente a una jornada de 25 horas semanales.

3.- Pago de bonos y asignaciones que indica

En cuanto a esta prestación corresponde acogerla dado que el contrato de trabajo de fecha 7 de septiembre de 2017 en su cláusula undécima sobre las remuneraciones del actor indica que la componen: a) sueldo base; b) asignaciones de modernización y especial de desempeño y c) bonificación compensatoria.

En cuanto al importe de estas prestaciones deberá determinarse en el procedimiento respectivo con mayores antecedentes.

V.- VALORACION DE LA PRUEBA

Se deja constancia que la prueba aportada por las partes fue valorada conforme a las reglas de la sana crítica, conforme lo mandata el artículo 456 del Código del Trabajo.

La que no fue expresamente valorada en el presente fallo no altera sustancialmente lo razonado en los párrafos precedentes.

En cuanto a la prueba testimonial de la demandada consistente en la declaración de doña **Paola Andrea Bustamante Maturana** sus dichos no resultan sustanciales como para desvirtuar lo razonado precedentemente, por cuanto la decisión resulta ser un tema más jurídico que factico, y en consecuencia los antecedentes que ella aportó no contradicen lo ya razonado.

En cuanto a la prueba confesional de la demandada, los dichos del actor en la citada diligencia no contradicen sus pretensiones por el contrario estos son consistentes con los demás antecedentes que obran en el proceso y no sirvieron para confirmar las alegaciones de la demandada.

En cuanto a la prueba documental de ambas partes ella fue ponderada en los párrafos precedentes, a excepción de aquellas que dicen relación con las remuneraciones del actor, por cuanto la forma en que se ha decidido respecto del pago de las prestaciones, ya que ellos no son suficientes para determinar el importe final a pagar.

VI.- DECISION

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1545, 1546 del Código Civil; artículos 1º, 2º, 3º 9º, 10, 11, 12, 159 N°4 y 446 a 462 y 510 del Código del Trabajo, se resuelve:

I).- Que, HA LUGAR a la demanda deducida por don RENATO CAMPOS



CASTRO en contra de la **CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DEL BIO BIO** representada por don **Gonzalo Contreras Reyes**, todos ya individualizados en la parte expositiva del presente fallo y en consecuencia se dispone:

1.- Que, se deja sin efecto la comunicación de fecha 24 de diciembre de 2018 remitida vía correo electrónico al actor, debiendo la parte demandada restituir las funciones que el señor Camos desempeñaba hasta el 31 de diciembre de 2018 en el Programa Mi Abogado, con una jornada de trabajo de 45 horas semanales y con la remuneración asignada al cargo con todos las bonificaciones y demás prestaciones que contenía su contrato de trabajo, actualizadas a la fecha de restitución efectiva.

2.- Que, la demandada deberá restituir las diferencias por concepto de remuneración que se hayan producido entre la fecha de exclusión del programa y la de la restitución, conforme a lo indicado en el número precedente. Las que deberán ser determinadas en el procedimiento correspondiente.

3.- Que, la demandada deberá pagar las asignaciones de modernización y especial de desempeño y bonificación compensatoria correspondiente según su contrato de trabajo de fecha 7 de julio de 2017.

El importe de las mismas deberá ser determinado en el procedimiento correspondiente.

III).- Que, las sumas ordenadas pagar lo serán con los reajustes e intereses legales respectivos.

IV).- Que, no se condena en costas a la demandada por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese vía correo electrónico a las partes y archívese en su oportunidad.

RIT O-777-2019

Dictada por **ELIECER ALFONSO CAYUL GALLEGOS**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.



JBNNSKBTNY

A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>